

RICARDO RUIZ FERRY, PERIODISTA DEPORTIVO Y CONDENADO A TREINTA AÑOS

Los periodistas deportivos, al igual que los críticos taurinos, no se quedaron al margen de la represión ejercida a través de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Ya en *Nos vemos en Chicote* (2015) vimos algún caso llamativo, pero me interesa ahora saber lo ocurrido con Ricardo Ruiz Ferry (1879-1956), un periodista que trabajó en las secciones deportivas de *El Heraldo*, *El Imparcial* y *El Sol*, además de fundar en 1915 *Heraldo Deportivo*. Asimismo, fue miembro del Comité Olímpico Español y presidente del Real Aéreo Club de España. El currículum parece ajeno a cualquier tema conflictivo durante la posguerra, pero quien tanto se ocupó del deporte también fue militante de Izquierda Republicana. Sus problemas empezaron nada más terminar la guerra.

La consulta del sumario 3828 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa no aclara lo sucedido cuando Ricardo Ruiz Ferry fue condenado a treinta años de prisión por el denominado Consejo de Guerra de Aviación [sic] el día 25 de abril de 1940, según un informe de la Dirección General de Seguridad fechado el 15 de junio de 1940, dirigido al Juez Instructor del Juzgado Militar Gubernativo y que forma parte de los documentos recopilados en dicho sumario. El correspondiente a la citada condena no aparece en el catálogo de causas judiciales depositadas en el Archivo General e Histórico de Defensa. Nos quedamos, por lo tanto, sin saber las razones del procesamiento, aunque las imaginamos relacionadas con su militancia en el partido de Manuel Azaña.

Sin embargo, las incompletas diligencias agrupadas bajo el número 3828 alumbran algunos pormenores donde se vio involucrado Ricardo Ruiz Ferry junto con otros periodistas relacionados con *Política*, un órgano de Izquierda Republicana publicado en Madrid, y *Mundo Obrero*, el periódico del PCE. Vayamos a los documentos para conocer este episodio hasta cierto punto menor de la represión ejercida contra los periodistas republicanos durante la posguerra, cuya exclusiva -como es lógico- no corresponde al Juzgado Militar de Prensa. La razón de esta dispersión de juzgados, entre otras, es obvia: esos mismos periodistas eran también políticos, profesionales, funcionarios, militares, docentes... A menudo, esas facetas profesionales prevalecían frente a la periodística y, en consecuencia, fueron procesados y condenados por diferentes juzgados especiales. De hecho, durante la inmediata posguerra los había por doquier con un sorprendente grado de especialización, aunque también es cierto que las dudas o las imprecisiones a la hora de denominarlos contribuyen a crear esa sensación de dispersión.

Vayamos a los documentos conservados en el sumario 3828 del Archivo General e Histórico de Defensa, cuyas inconclusas diligencias correspondieron al Juzgado Instructor Militar de Guardia letra G, de Madrid. El 2 de mayo de 1939, el veterano periodista Pablo Feal Sánchez, en su calidad de gerente de la Editorial Católica, presenta una denuncia contra los representantes de *Mundo*

Obrero por haberse incautado el 22 de julio de 1936 el local, las cuentas bancarias y los bienes de la empresa propietaria del periódico *Ya*. Su denuncia va más allá en el tiempo: «este régimen de uso y disfrute de todo lo que pertenecía a la Editorial Católica ha continuado durante los treinta y dos meses de dominio rojo en Madrid por los representantes del periódico *Mundo Obrero*, propiedad del partido comunista».

Pablo Feal Sánchez ignora los nombres de los responsables directos de la incautación que tuvo lugar a principios de la guerra. No obstante, el gerente de Editorial Católica señala en su denuncia a Jesús Hernández, quien fuera el director de *Mundo Obrero* hasta el nombramiento como ministro, «un tal Mitjé, un tal Cimorra, un tal Mayo, un tal Diéguez y otros varios cuyos nombres restantes, apellidos y domicilios actuales desconoce». La denuncia es imprecisa y poco contribuiría a la consiguiente investigación, pero resulta indudable que cualquier periodista comunista por entonces en las cárceles afrontaba un oscuro porvenir, como ya vimos en el caso del fusilado Manuel Navarro Ballesteros, el director del órgano oficial que sustituyó a su camarada Jesús Hernández.

Al día siguiente de presentar la denuncia, el titular del Juzgado Instructor Militar de Guardia letra G dicta una providencia para averiguar los hechos. Habría prisa por alguna razón y ese mismo día presta declaración el denunciante. Pablo Feal Sánchez se ratifica ante el juez en lo manifestado por escrito y aprovecha la ocasión para extender la responsabilidad de la incautación a todos los responsables y dirigentes del PCE. El titular del citado juzgado eleva inmediatamente la denuncia al auditor de guerra, sin que la misma prosperara. La razón dista de ser un sorprendente olvido o perdón de los responsables jurídicos del Ejército de Ocupación. Tal y como es imaginable, los comunistas procesados por entonces en Madrid afrontaban acusaciones mucho más graves que la de una incautación, al menos a los ojos de quienes por entonces actuaban en los tribunales de los consejos de guerra.

Pablo Feal Sánchez debió ser un gerente práctico y diligente en la defensa de sus intereses. A tenor de los documentos conservados en el sumario 3828, el periodista católico presentó otra denuncia paralela el mismo día 2 de mayo de 1939. En esta ocasión iba dirigida contra los representantes del periódico *Política*, un órgano de Izquierda Republicana, que se incautaron de las mismas instalaciones de la Editorial Católica para -supongo- compartirlas con los colegas de *Mundo Obrero*. La novedad con respecto a la anterior es que Pablo Feal Sánchez aporta los nombres y los domicilios de los consejeros del periódico republicano: Salvador Quemades, Guillermo Gorostiza, Juan Albert, Ricardo Ruiz Ferry y Vicente Alonso de Cossío.

Al día siguiente, el titular del citado juzgado militar dicta una providencia para detener a los señalados y toma declaración jurada al denunciante, que se ratifica en lo expresado en su escrito del día 2 de mayo. Un día después, con unas prisas propias del momento judicial, el juez eleva las diligencias al auditor de guerra, quien en un escrito firmado el día 5 de mayo ordena la apertura del sumario 3828 contra los periodistas Salvador Quemades, Ramón Ariño, Guillermo Gorostiza,

Juan Albert, Ricardo Ruiz Ferry y Vicente Alonso Cossío, aunque el primero estaba por entonces en el exilio. El último, por su parte, sería procesado en otro consejo de guerra cuyo sumario se encuentra en el Archivo General e Histórico de Defensa (16703, leg. 2673, 16)

Las actuaciones debieron quedar estancadas porque no resultaba fácil localizar a los denunciados en las abarrotadas cárceles de la posguerra y, en escrito del 30 de septiembre de 1939, el auditor de guerra manda que los antecedentes registrados pasen al Juzgado Especial de Detenidos Gubernativos. El error es evidente en el caso de Ramón Ariño Fuster (1901-1987), que fue director de *Política*. El republicano de Leganés fue condenado a muerte en un consejo de guerra y pasó más de veinte años en las cárceles franquistas hasta salir en libertad en 1962, según el testimonio de Isabelo Herreros. De hecho, en el catálogo del Archivo General e Histórico de Defensa constan hasta seis causas judiciales a su nombre. Dada semejante acumulación, parece más que probable que el episodio de la incautación apareciera en alguna o varias de las seis causas contra Ramón Ariño Fuster.

El nuevo juzgado de destino de los antecedentes ya no se dio prisa alguna a la vista de los documentos conservados en el sumario 3828. La paralización debió dar paso a un sobreseimiento del que no hay constancia. El 5 de febrero de 1940, la dirección de la cárcel de Porlier comunica al titular del Juzgado Especial de Gubernativos que se ha recibido el mandamiento de libertad de Ricardo Ruiz Ferry en el expediente gubernativo 1380, «no habiéndose cumplimentado por encontrarse este detenido a disposición del Juzgado de Suboficiales de Aviación». El resultado del consiguiente sumarísimo de urgencia fue una condena a treinta años de la cual no hay constancia en el sumario 3828. Tal vez porque la burocracia represiva estaba desbordada por entonces. Sin embargo, contrasta esta situación con la protagonizada el 15 de septiembre de 1939 por Miguel Hernández, que recibió un similar expediente gubernativo y fue puesto en libertad puesto que las autoridades carcelarias no tenían constancia de su procesamiento en un consejo de guerra.

El mismo día 5 de febrero de 1940, la dirección de la cárcel de Porlier comunica al juzgado de gubernativos que ha recibido el mandamiento de libertad de Juan Alberto Roses, «no habiéndose cumplimentado por haber asistido a juicio ante Consejo de Guerra, ignorándose la petición fiscal del mismo». Consultado el catálogo de causas judiciales del Archivo General e Histórico de Defensa, no me consta alguna cuyo encausado responda a ese nombre. La actuación se repite en el caso de Ramón Ariño Fuster, que por entonces afrontaba en otros consejos de guerra acusaciones más graves que la de una incautación de responsabilidad colectiva. Por lo tanto, cabe pensar que el Juzgado Especial de Gubernativos, ante la imposibilidad de sustanciar una acusación con un mínimo de pruebas o testimonios, mandara liberar a quienes estaban pendientes de unos sumarísimos de urgencia que les resultaron fatales para su futuro.

El silencio se cierne sobre el sumario 3828 durante los tres años siguientes, pero la burocracia represiva era sistemática a la hora de dar el carpetazo a aquello

que carecía de futuro procesal. Por fin, el 4 de febrero de 1943, el auditor de guerra afirma lo siguiente acerca de estas diligencias, que tan poco o nada habían aclarado acerca de la incautación del local donde se editaba el periódico católico: «y apareciendo que valorados los hechos dentro del volumen de responsabilidades derivadas de la rebelión y atendido el espíritu que informa las últimas disposiciones de la Superioridad, no se encuentran en el presente caso méritos bastantes para calificar la existencia de delito, es procedente que V.E. acuerde la terminación de los presentes sin declaración de responsabilidad». El juzgado especial de presos gubernativos actuaría en consecuencia, paralizando cualquier actuación, pero el sumario 3828 no quedó definitivamente archivado hasta el 15 de julio de 1946, es decir, siete años después de una denuncia que fue tramitada por la vía de urgencia porque «la Superioridad» mantenía por entonces otro criterio.

El gerente y periodista Pablo Feal Sánchez no obtuvo respuesta alguna para su denuncia, probablemente basada en hechos veraces, pero también es cierto que por esas mismas fechas de la posguerra se produjeron varias incautaciones periodísticas ante el beneplácito de las autoridades dispuestas a castigar las realizadas en 1936. La conclusión es sencilla: el problema no era la incautación de un local y unas propiedades, sino quién la había llevado a cabo y con qué objetivos. Lo importante no era tanto el hecho delictivo como el protagonista. Unos eran los enemigos a castigar y otros los vencedores a premiar.